

Año VI Enero – Junio de 1938 Nos. 23 y 24

Revista de Derecho

SUMARIO

David Stichkin	Las modernas tendencias del Derecho	Pág. 1837
Dr. Jorge Abásolo S.	Responsabilidad inter - voluntaria o inter - responsabilidad	» 1871
Ramón Domínguez B.	Prescripción de la acción civil que se ha reservado en el Juicio Criminal	» 1889
	MISCELANEA JURÍDICA	» 1895
	JURISPRUDENCIA	» 1907
	NOTAS UNIVERSITARIAS	» 1955
	LEYES Y DECRETOS	» 1969

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN (CHILE)

Ramón Domínguez Benavente

Prescripción de la Acción Civil que se ha reservado en el Juicio Criminal

EL Código de Procedimiento Penal, en su artículo 32, permite que la acción civil que puede nacer de un delito se reserva para ejercitarla con posterioridad al fallo del proceso criminal. Esta facultad tiene por fundamento, entre otros, la influencia de la cosa juzgada criminal en materia civil, pues, según el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil, en los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al reo. Sin embargo, y a pesar de lo establecido en el artículo 32 del de Procedimiento Penal, hay dudas respecto a la prescripción de la acción civil, ya que, mientras el artículo últimamente citado permite la reserva, el 62 de este mismo Código dispone que "la extinción de la responsabilidad penal, la prescripción de la acción civil y de la penal, y la prescripción de la pena, se regirán respectivamente por las reglas establecidas en el artículo 2332 del Código Civil, y en el título V del libro I del Código Penal".

Como puede verse claramente hay, entre los artículos 32 y 62 del Código de Procedimiento Penal, una aparente contradicción, pues mientras el primero — el 32 — faculta a una de las partes para reservar su acción para el juicio ci-

vil, el segundo, — el 62 — dice que ello es “sin perjuicio” de lo prescrito en el artículo 2332 del Código Civil.

Prácticamente puede plantearse el problema en los siguientes términos: si A. se querella contra B., por ser este último autor de un delito, del cual nace también acción civil, y se reserva esta última para ejercitarla con posterioridad al proceso-criminal, el cual dura más de cuatro años, ¿podría B. alegar, en el segundo juicio, la prescripción de la acción civil, conforme al artículo 2332 del Código Civil? ¿Podría A. al contrario, ejercitar la acción civil sin temor a la prescripción de su acción? En otros términos, ¿debe considerarse que la prescripción de la acción civil empieza a correr en el momento de cometerse el acto punible, o al contrario, sólo después de terminado el juicio criminal?

La Excelentísima Corte Suprema, en sentencia publicada en la Revista de Derecho y Jurisprudencia, T. 32, 2.ª parte, S. 1.º, pág. 347, ha sentado la doctrina de que “el plazo para la prescripción de la acción civil, se cuenta desde que termina el juicio criminal”. Según esto tendríamos, pues, que el juicio criminal interrumpe la prescripción de la acción civil. Disentimos de tan autorizada opinión.

En nuestro concepto el plazo de prescripción de la acción civil derivada de un delito o cuasi-delito a la vez penal, reservada para ejercitarla con posterioridad al juicio criminal, empieza a correr desde el momento de la perpetración del hecho punible. En efecto, si bien es verdad que el artículo 32 del Código de Procedimiento Penal ha permitido la reserva ello es, como lo dice la ley, “sin perjuicio” de lo ya establecido en el artículo 2332 del Código Civil, artículo este último que, ubicado en el título 35 del libro IV del Código Civil, que trata de los delitos y cuasi-delitos, dice a la letra: Las acciones que concede este título por daño o dolo, prescriben en cuatro años desde la perpetración del acto”.

Por consiguiente, el legislador del Código de Procedimiento Penal estimó, en nuestra opinión, que no por el hecho de la reserva que se haga de la acción civil deja de aplicarse

Prescripción de la Acción Civil, etc.

1891

el artículo 2332 del Código Civil; prueba de ello es que lo consignó expresamente.

La Corte Suprema tuvo en consideración, para fundamentar su fallo, que dicho sea de paso fué aprobado con tres votos en contra, la circunstancia de que "el tiempo que media entre el suceso que motiva el derecho y el ejercicio de éste no es el único elemento constitutivo de la prescripción, pues es menester, además, que durante ese lapso el acreedor no ejercite su acción; y se ha visto que mientras tanto se está averiguando nada menos que la existencia misma, del hecho y su realización jurídica, y representa así, ya la acción deducida sobre uno de los elementos que pasa a ser previo, esencial y determinante para fijar el monto de las indemnizaciones; es decir, se está en presencia de un verdadero ante juicio, que, aunque abarque uno solo de los aspectos a que se tiene derecho, es por expresa autorización y podría decirse, que sólo desde el instante de este fallo toma cuerpo el hecho investigado y se incorpora definitivamente como fuente de derechos y obligaciones" (considerando 7.º).

El considerando citado nos parece que se aleja un poco de las prescripciones legales. En verdad, la acción civil que puede nacer de un delito para obtener una indemnización, más o menos cuantiosa, no emana ni "se incorpora definitivamente, como fuente de derechos y obligaciones" desde el momento en que termina el proceso criminal, por la condena del culpable. Al contrario.

Hay buenas razones para estimar que no es el fallo del juicio criminal el que crea el derecho a la indemnización y, por ende, al ejercicio de la acción civil. Desde luego, las sentencias son sólo títulos declarativos, de aquellos que se limitan a reconocer un derecho preexistente. La acción civil, por consiguiente, nace desde el momento en que el hecho punible que le da nacimiento se efectúa. Tan cierto es lo anterior que puede ejercitarse, por una persona, sólo la acción civil y abandonar a su propia suerte la acción penal que puede nacer del mismo delito.

Por otra parte, el artículo 1437 del Código Civil, al señalar al delito y cuasi-delito como fuente de obligaciones, se ha referido, indudablemente, al momento en que el acto se realiza y no atiende a las contingencias de un juicio criminal previo, pues es sabido que hay delitos que son civiles y penales a la vez. La razón está en la diferente naturaleza de una y otra acción; la penal tiende al castigo, a la defensa del orden social, la mayoría de las veces; la civil mira al interés privado y patrimonial que se siente lesionado. Es un mismo hecho el que a veces da origen a dos acciones: una civil y otra penal.

Ahora bien, ¿qué ha querido decir, entonces, el legislador con la disposición del artículo 32 del Código de Procedimiento Penal? Ni más ni menos que lo establecido en el artículo 62, o sea, que es "sin perjuicio" de lo que ya ha dicho en el Código Civil, respecto a la prescripción. Y ello se justifica más aún si se tiene en cuenta que el Código Civil es, a este respecto, una ley especial que, en conformidad al artículo 13 del mismo Código, debe prevalecer sobre principios generales de otras leyes, ya que en su artículo 2332, y al cual se remite el artículo 62 ya citado, ha señalado el tiempo de prescripción.

La Corte Suprema, al precisar el alcance del artículo 32, ha dicho que "si bien, según el Código Civil, estas acciones prescriban en cuatro años contados desde la perpetración del acto, armonizando este precepto con el ya establecido y con el 62 del de Procedimiento Penal que hace regir el 2332 del Civil dejando a salvo lo preceptuado en el 32, se llega ineludiblemente a la conclusión de que con esas referencias sólo se ha querido mantener la duración del plazo de la prescripción de corto tiempo de cuatro años, puesto que habiendo existido la situación ya dicha, con muy atendibles razones se habría podido sostener que se caía en los plazos generales que rigen la indemnización de perjuicios" (considerando 8.º).

En realidad el alcance del artículo 32 del Código de Procedimiento Penal, y al cual nos hemos referido anteriormen-

Prescripción de la Acción Civil, etc.

1893

te, nos parece que no es él que le ha dado la Corte Suprema. Estimamos que en verdad el plazo de prescripción de la acción civil es de cuatro años, tal como lo prescribe el artículo 2332 del Código Civil y el fallo comentado; pero la iniciación de estos cuatro años se cuenta desde la perpetración del hecho punitivo. El juicio criminal sólo tendría la virtud de suspender la prescripción, desde la iniciación hasta el fallo, de tal suerte que todo el tiempo anterior al proceso criminal se cuenta para contar los cuatro años ya referidos. Es lo que estima, por otra parte, el jurisconsulto señor Arturo Alessandri R. (1).

Sin duda alguna que a primera vista parece un poco sutil y, hasta si se quiere, una confirmación de lo expuesto por la sentencia de la Corte Suprema. Sin embargo, la diferencia de criterio es fundamental. En efecto, para la Excelentísima Corte Suprema sólo empieza la prescripción al término del juicio criminal; para nosotros, al contrario, desde la realización del hecho punible, tal como lo ordena el artículo 2332 del Código Civil, y el juicio criminal sólo suspendería la prescripción de la acción civil por el tiempo de su duración. "De esta manera, como dice el señor Alessandri, se respeta la ley se favorece a la víctima".

Por consiguiente, si un delito o cuasidelito, penal y civil a la vez, se ha cometido cuatro o más años antes de su prosecución por la vía judicial, de nada le serviría al querellante la reserva de su acción civil, que le concede el artículo 32 del Código de Procedimiento Penal, pues ya estaría prescrita, de acuerdo con el artículo 2332 que la hace correr "desde la perpetración del acto".

(1) La responsabilidad extra-contractual Civil. Curso de 1937. página 90.